

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

AUTO

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. representada legalmente por el señor Richard Giovanny Suarez Torres identificado con cédula de ciudadanía 79.576.294 y tarjeta profesional 103.505 del Consejo Superior de la Judicatura, quien además actúa como apoderado judicial inscrito en el certificado de Cámara de Comercio de dicha sociedad, y por sustitución de éste se le reconoce personería a la doctora Claudia Milena Guarín García identificada con cédula de ciudadanía 1.038.413.681 y tarjeta profesional 306.473 del Consejo Superior de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 022 2018 00320 00, promovido por la señora **LUZ MARINA MONTOYA HINCAPIÉ** contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. – PROTECCIÓN** y la **ADMINISTRADORA**

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al cual fue vinculado **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS – COLFONDOS**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados del demandante y de Colpensiones frente a la sentencia emitida el 19 de agosto de 2020 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, y revisar en consulta la misma providencia en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **325**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Luz Marina Montoya Hincapié demandó a Protección y a Colpensiones pretendiendo se declare la ineficacia o en subsidio la nulidad de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección, y como consecuencia, se disponga el restablecimiento de su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones sin solución de continuidad, la devolución a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de los aportes de la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos y la validación de estos aportes. Se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez al amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, intereses moratorios y/o indexación. La indemnización de perjuicios ocasionados a cargo de Protección, y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que nació el 23 de abril de 1955. Se afilió al RPMPD el 30 de marzo de 1982. Se trasladó a Colmena hoy Protección. Aduce que el fondo privado no le explicó su verdadera situación pensional, tampoco sobre el derecho que le asistía por ser afiliada al RPMPD, ni le dio a conocer las ventajas y desventajas de su traslado de régimen, brindando así una información engañosa e incompleta. Recibió asesoría de un tercero donde se le informó que, si no se trasladaba de manera inmediata al RPMPD, perdería definitivamente su derecho pensional bajo el régimen de transición y su derecho al retorno. Agrega que acredita más de 1.000 semanas de cotización. El 18 de mayo de 2010 solicitó ante Colpensiones la pensión de vejez, misma que le fue negada a través de la Resolución GNR 263035 de 18 de octubre de 2013 con el argumento que solo contaba con un total de 744 semanas y que a pesar de que tenía la edad para estar cobijada por el régimen de transición no contaba tampoco con las 500 semanas mínimas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Se indica que en su historia laboral se reportan semanas en mora con los siguientes empleadores: i) Rafael Ignacio García Carvalho del 1º de junio de 1995 al 1º de junio de 1998, y del 13 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2007, con periodos simultáneos entre el 13 de febrero y el 30 de septiembre de 1999 con la empleadora Flor Gertrudis Gómez, para un total de 413.77 semanas en mora. Y ii) Flor Gertrudis Gómez del 1º de enero de 1998 al 30 de septiembre de 1999, equivalentes a 37.71 semanas. Señala que los ex empleadores referidos expidieron certificación laboral el 8 de marzo y el 1º de abril de 2015, que coinciden con los periodos en mora reportados, máxime que Colpensiones no ejerció el cobro coactivo de los mismos. Aduce que instauró demanda ordinaria ante Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, proceso que se tramitó en el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín bajo radicado 05001310502220160017300, que culminó con sentencia favorable en primera instancia, pero fue revocada en providencia de 24 de agosto de 2017 proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral, y en su lugar se absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda. Agotó reclamación administrativa.

En sentencia proferida el 19 de agosto de 2020, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia del traslado de la señora Luz Marina Montoya Hincapié al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Colfondos y por Protección entendiéndose que la demandante ha estado afiliada válidamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones. Declaró probada la excepción de prescripción respecto de los aportes destinados a otros fines diferentes a la cuenta de ahorro individual como cuotas o gastos de administración, fondo de garantía de pensión mínima y primas de reaseguros del Fogafín y primas de seguros de invalidez y de sobrevivencia. Declaró probado el pago propuesto por Colfondos y de oficio en relación con Protección respecto del traslado de saldos de la cuenta de ahorro individual de la actora a la entidad correspondiente. Condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Luz Marina Montoya Hincapié la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 22 de junio de 2015, sobre 14 mesadas pensionales, en cuantía de un SMLMV y la indexación de la condena. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas entre el 23 de abril de 2010 y el 22 de junio de 2015. Y condenó a las codemandadas y a Colfondos a pagar las costas del proceso.

El juzgador de primera instancia para motivar su decisión precisó que partiendo del hecho de que la demandante se encuentra afiliada al RPMPD sin solución de continuidad, resulta beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1º de abril de 1994 fecha de entrada en vigencia de la referida Ley contaba con 38 años de edad, por lo que dicho beneficio se le hizo extensivo hasta el 31 de julio de 2010, pues cumplió la edad mínima en abril del mismo año y le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990. Que la historia laboral de la actora obrante en el expediente expedida por Colpensiones el 6 de agosto de 2020, registra 835 semanas en toda la vida laboral. Que entre los periodos agosto y diciembre de 1996 se deben contabilizar 11.99 semanas, lo que arroja un total de 846 semanas en toda la vida, de las cuales 504 se efectuaron en los últimos

veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, por ende, puede acceder al derecho pensional bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990. Que el estatus de pensionada lo adquiere desde el 23 de abril de 2010, cuando cumplió los 55 años de edad, máxime que se retiró del sistema de pensiones en julio de 2008, y los aportes realizados en 2015 resultan aislados. Que respecto de los periodos que se aducen en mora en la demanda con los empleadores Rafael Ignacio García y Luz Marina Montoya Hincapié, no los tiene en cuenta el Despacho, pues si bien no se desconoce el precedente de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con la mora patronal; lo cierto es que la prueba documental allegada, específicamente las certificaciones suscritas por los empleadores mencionados, aunque en principio se presumen auténticas, conforme lo previsto en el Código General del Proceso, no le dan certeza al Despacho de la existencia de una relación laboral para los periodos aludidos morosos, toda vez que se presentan inconsistencias con lo asentado en la historia laboral y con lo dicho por la accionante en el interrogatorio de parte. Y respecto de la prescripción indicó que se encuentran afectadas por dicho fenómeno las mesadas pensionales causadas entre el 23 de abril de 2010 y el 22 de junio de 2015, en la medida que la presentación de la demanda efectuada el 22 de junio de 2018 interrumpió la prescripción, y que aunque la pensión de vejez se reclamó el 18 de mayo de 2010, estando interrumpida hasta el 18 de octubre de 2013, cuando Colpensiones por medio de la Resolución GNR 263035 resolvió la prestación desfavorablemente, a partir de tal momento, transcurrieron más de tres años hasta 2018, sin que tenga mayor relevancia la reclamación administrativa realizada el 13 de marzo de 2018 con la cual se solicitó la ineficacia de traslado y la pensión de vejez.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la demandante considera que en este juicio no ha operado el fenómeno de la prescripción, pues expone que *“...para la fecha 23 de abril del año 2010 ya mi cliente reunía tanto la edad como las semanas que encontró el Despacho en su análisis en el aspecto de las quinientas semanas entre los 35 y los 55 años, reunidos entonces esos elementos o estos requisitos, mi cliente presenta solicitud de pensión ante Colpensiones el 18 de mayo del año 2010, esa decisión o esa solicitud mejor se resuelve mediante sentencia,*

mediante resolución GNR 263035 del 18 de octubre de 2013 que obra en la foliatura en la que se resuelve negar el reconocimiento y pago de la pensión con los argumentos ya expuestos en la demanda y que también hizo análisis el Despacho en concreto por el no cumplimiento del total de semanas para esa calenda, ejecutoriada entonces esa decisión mi cliente hace o mejor se presenta la primera demanda que ya es conocida, se presenta, perdón, se presenta reclamación a Colpensiones por primera vez digamos con respecto a la posterior decisión de Colpensiones el 23 de noviembre del año 2015, la demanda que viene después de esa reclamación se presenta a la judicatura el 5 de febrero del 2016, donde en principio como bien lo anotaba el Despacho, lo que se discutió en esa oportunidad fue lo concerniente a la pensión de vejez. Si bien es cierto en esa oportunidad no se hizo discusión frente al tema de la ineficacia, pues para nosotros en ese momento considerábamos que no era necesario hacer esa discusión, sin embargo, las resultas en primera instancia fueron favorables y en segunda desfavorables por las razones ya expuestas, lo cierto es que la sentencia de segunda instancia sale desfavorable pero por el tema de no haber reclamado o no haber puesto en discusión el tema de ineficacia del traslado, para qué hago alusión a este asunto porque quiero dejar significado señor juez que, el tema de la pensión que es sobre el que cae la prescripción que ahora declara el Despacho ya estaba discutido, ya se había resuelto y ya estaba interrumpido, lo que se hace en esta segunda, en este segundo proceso del que hoy hace conclusión y decisión su Despacho, tiene que ver en principio el tema de la ineficacia y como consecuencia de ello, nuevamente hacer el análisis pensional, sin embargo, a mí me parece que el tema pensional no solo venía interrumpido sino que sobre ese asunto no había que volver a contabilizar prescripción porque como le digo el tema pensional ya había sido reclamado ya había sido discutido y ya estaba interrumpido, solo bastaba como requisito previo para hacer ese nuevo análisis que era el tema de la ineficacia, en ese sentido entonces a mí me parece que la fecha que fija el Despacho con todo respeto, con el análisis que hizo de la prescripción me parece que entonces resulta equivocado, porque pone como fecha de prescripción a partir del 22 de junio del año 2015. Así las cosas entonces yo lo que le solicito al Tribunal Superior de Medellín es que se tenga en cuenta el retroactivo pensional a partir del cumplimiento del requisito de pensión, pues porque el mismo a través de las discusiones administrativas y judiciales, no cortó el fenómeno de la prescripción si no que se suspendió y se debe entonces reconocer la prestación desde el momento en que cumplió el último requisito que era la edad el 23 de abril del año 2010, concretamente a partir del día siguiente 24 de abril de 2010 como se solicitó en la demanda. Por otra parte y en aras de la discusión si encontrase el Tribunal que la fecha correcta es la que establece el Despacho, yo encuentro que la reclamación administrativa que dio origen a esta

segunda causa se hizo el 13 de marzo del 2018, y la demanda se presentó el 22 de junio del 2018, lo que quiere decir es que si echamos hacia atrás esos tres años de prescripción desde la reclamación pues entonces nos daría es 13 de marzo del año 2015, para que hago esta segunda acotación lo pido en subsidio al Tribunal en el entendido de que no coincida con el argumento presentado con la primera, el primer análisis de que debe ser desde el cumplimiento de requisitos desde el año 2010, en todo caso la fecha que estableció el Despacho debió haber sido 13 de marzo del año 2015 y no 22 de junio del 15, así entonces yo solicito al Tribunal Superior de Medellín que modifique la fecha del reconocimiento o el disfrute mejor de la pensión de vejez de mi cliente en cuanto a que el retroactivo debe ser reconocido en primer término desde el 24 de abril del 2010 y en segundo término si no se acepta mi argumento debe ser tres años anteriores a la reclamación de esta segunda causa que se hizo 13 de marzo del 18, por lo tanto, debía ser reconocida a partir del 13 de marzo del año 2015...”. Y aspira al reconocimiento de los intereses de mora, ya que en su criterio “...si bien es cierto que Colpensiones hizo unos análisis previo en resolución ya indicada donde no reconoció la prestación por considerar que no reunía los requisitos, incluso, el Despacho no acogió nuestra tesis presentada en la demanda en lo que tiene que ver con las semanas en mora por la explicación que bien hizo el Despacho, pero encontró en su defecto que efectivamente para el momento en que decidió Colpensiones por primera vez la prestación de mi cliente, esto es, por allá en el año 2013 para esa calenda, sí tenía derecho a la pensión con base en el régimen de transición y ese análisis o esa deficiencia en el análisis, en las pruebas y en la historia laboral fue una equivocación de Colpensiones y no de mi cliente y una equivocación de esa naturaleza la debe asumir es quien la comete, entonces si para ese momento mi cliente si contaba con los requisitos para obtener derecho a su pensión, lo que quiere decir es que la decisión de Colpensiones estuvo mal tomada, y por consiguiente está en mora de reconocer esos intereses no solo desde la misma fecha de la primera resolución en el año 2013, sino en lo subsiguiente de lo que ha ocurrido hasta la fecha...”.

La apoderada de Colpensiones inconforme con la decisión del *a quo*, precisó que cuando Colpensiones revisó la historia laboral pese a que la actora cumplía el requisito de la edad, no colmaba la densidad de semanas suficientes, y como consecuencia se estableció que no tenía el derecho a recuperar el régimen de transición.

Frente al recurso promovido por el apoderado de la demandante, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones presentó de manera oportuna escrito de alegatos de conclusión, solicitando que se estudien nuevamente las condenas proferidas. Precisa que frente al tema de la pensión de vejez no se agotó el requisito de reclamación administrativa. Que en caso de considerar que está llamada a prosperar la ineficacia declarada, solicita la devolución de todos y cada uno de los conceptos que se encuentran en la cuenta de ahorro individual de la afiliada, incluyendo las cuotas de administración y lo referente al seguro provisional. Y que se exonere a su representada del pago de las costas.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si el traslado entre administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, efectuado por la actora se torna ineficaz como lo precisó el Juzgador de primera instancia y, en caso afirmativo, se abordará como problemas jurídicos asociados determinar si ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, así como definir las restituciones a que haya lugar entre entidades pensionales. Adicionalmente, en caso de ser procedente la referida ineficacia, si debe condenarse a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez y la indexación en favor de la accionante.

Se abordará como problema jurídico asociado, si ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción.

CONSIDERACIONES

Esta Sala se acoge al precedente jurisprudencial pacífico, que en temas en un principio de nulidad y posteriormente de ineficacia, ha desarrollado la Honorable

Corte Suprema de Justicia con ya 14 años de desarrollo, esto es, desde las sentencias 31989 y 31214 de 2008, cuando se analizó la situación que nos convoca bajo la óptica de la *nulidad del acto jurídico*, situación que cambió en cuanto a su consecuencia jurídica a partir de la sentencia SL 12136 de 2014, donde se abordó la *ineficacia*.

La figura de la ineffectia, en materia de elección de un fondo pensional, tiene su sustento en la parte final del inciso primero del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, cuando hace referencia al hecho que si por cualquier forma se atenta contra el derecho a la afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se dejará sin efecto la afiliación respectiva.

Según se desprende de los fundamentos fácticos de la acción, se duele la parte actora de la omisión por parte de Colfondos y de Colmena, hoy Protección, del deber de información, por tanto, se hace necesario abordar bajo tal óptica la situación del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad proveniente del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, llevado a cabo el 31 de mayo de 1995 ante Colfondos y la vinculación posterior el 15 de agosto de 1996 ante Colmena, hoy Protección.

Respecto a la información que deben brindar los fondos de pensiones a quienes pretenden captar como sus afiliados, es importante tener en cuenta que el mismo no tiene como fuente primigenia la llamada ley de doble asesoría 1748 del 2014, con su decreto Reglamentario 2071 de 2015, pues dicha obligación existe desde el estatuto orgánico del sistema financiero, Decreto 663 de 1993 en su artículo 97, al igual que el Decreto 720 de 1994 en sus artículos 10 y 12, que determina que la información suministrada debe ser suficiente, amplia y oportuna, trasladando además las responsabilidades del asesor de los fondos pensionales a las entidades que representan.

Ahora bien, es importante precisar que, al tratarse de la multicitada figura de la *ineficacia*, esta no es susceptible de saneamiento, a más que lo se pretende es dejar sin efectos el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, esto es, el acto jurídico realizado por la asegurada el 31 de mayo de 1995 ante Colfondos

y la vinculación posterior el 15 de agosto de 1996 ante Colmena, hoy Protección, por tanto, el estudio debe centrarse exclusivamente al cumplimiento o no del deber de información de dicho momento lo cual tiene su sustento en la sentencia SL 1688 de 2019, que como su referente lo indica proviene de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

El análisis del tema pensional, bajo la perspectiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, es un tema complejo, pues refiere múltiples aspectos y variables como lo son la forma de liquidación de las prestaciones en el caso que el afiliado tenga o no beneficiarios, los capitales requeridos para pensión ordinaria o anticipada, las condiciones de la garantía de pensión mínima, las modalidades de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, la forma en general como se financia la prestación, la incidencia de las fluctuaciones de los mercados en cada cuenta de ahorro individual, y en general, en principio, más que un comparativo de los montos pensionales su diferentes aspectos de un régimen frente al otro, situaciones estas básicas que son comprendidas dentro de los mandatos del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 que disponía para el momento del traslado de la actora: “Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicios claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado” y, por su parte, el Decreto 720 de 1994 en su artículo 12, cuyo texto preceptúa: “...Obligación de los promotores. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado...”, por lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia delimitó como un primer momento frente al deber de información.

Dado el anterior precedente, es claro para la Sala de Decisión, que a la señora Luz Marina Montoya Hincapié, no se le suministró la información de la forma que ha determinado nuestro máximo órgano de cierre jurisdiccional, o al menos no obra como una verdad procesal, pues la única referencia que se tiene al

respecto es lo narrado por la actora en el interrogatorio de parte, donde advierte que su traslado a las AFP se dio por la firma de unos documentos que ella consideró solo le trasladarían la salud mas no la pensión, según la información que se le dio. Manifiesta que cuando le empezaron a llegar extractos, le pareció extraño porque nunca se había salido del seguro y pidió información a la secretaria y de tanto insistir le dio una carta para que Colfondos y Protección devolvieran las cotizaciones al ISS.

Para definir lo anterior, se hace imperioso determinar a quién corresponde la carga de la prueba de la omisión total o parcial al deber de información al momento de la afiliación o traslado, y en dicho sentido la Sala acoge el precedente reiterado de la inversión de la carga de la prueba, con fundamento en las Sentencias SL 1.452 y SL 1.688 de 2019 donde la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, explicó, que en los procesos en los cuales se controvierte la eficacia del traslado entre regímenes pensionales, la demostración del consentimiento informado es el que tiene la virtud de generar la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez; “...si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó...”.

Según la Corporación mencionada, la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia “...en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada –cuando no imposible- o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar

información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento...”.

Conforme al criterio expuesto, lo afirmado en un formulario de traslado de régimen pensional acerca de la selección libre y voluntaria de régimen por parte de un afiliado, no puede calificarse como tal si éste no recibe información veraz, oportuna, clara, comprensible y completa sobre los alcances de dicha decisión, ni el traslado se convalida en fecha posterior con la simple firma de otro formato o con la sola presentación de un cálculo actuarial, considerando el cambio sensible que ese acto jurídico genera en el derecho pensional de los afiliados al sistema, y considerando que el acto del cual se estudia la ineficacia es el de traslado de régimen.

Además, el deber de información a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones no es un privilegio de quienes se benefician del Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (véase sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1452 de 2019 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia), porque el ordenamiento constitucional y legal colombiano no hace esa distinción, a más que las razones expuestas por la Corte Suprema de Justicia tienen aplicabilidad tanto para beneficiarios como no del régimen de transición.

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, “...no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición...” (Sentencias SL 19.447 de 2017 y SL 1.452 y SL 1.688 de 2019), lo que significa que la firma del formulario no es suficiente para agotar el deber de información a cargo de la Administradora de Fondos de Pensiones que pretende captar un afiliado.

Esta Sala acoge el planteamiento, en la medida que se encuentran dados los presupuestos legales y jurisprudenciales para que proceda la declaratoria de

ineficacia petitionada. Además, ninguna prueba en el plenario permite establecer que el traslado al régimen de ahorro individual por parte de la asegurada a Colfondos y a Protección se hubiese realizado bajo los parámetros de libertad informada y transparencia mínimos.

Ahora bien, se debe ocupar la Sala del análisis de la excepción de mérito de prescripción, la cual fue alegada por las demandadas. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que desde la existencia del Tribunal Supremo del Trabajo la jurisprudencia ha sostenido de manera invariable que el derecho a la pensión en sí mismo no prescribe, por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, empero prescriben las mesadas o los reajustes pensionales exigibles que no se hubiesen cobrado por su beneficiario dentro del lapso trienal previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Sentencias de 18 de diciembre de 1954; y 18 de febrero de 2005, Radicado 21.378).

Además, en la Sentencia SL 68.838 de 8 de mayo de 2019, la Sala de Casación Laboral explicó: **i)** que la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, como también lo es el derecho ciudadano a reivindicar en cualquier tiempo un derecho pensional, o a mejorar su prestación; **ii)** que el análisis de la prescripción no puede realizarse de forma aislada y desconectada de los derechos que pretenden reivindicarse a través de su reconocimiento; **iii)** que los hechos o estados jurídicos no prescriben, “a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que surjan de ello”; y **iv)** que esta última tesis cobra más sentido en relación con la pretensión de “ineficacia”, porque la sentencia que la declara, en realidad lo que hace es comprobar o constatar un estado de cosas surgido con anterioridad al inicio de la Litis.

Igualmente, en la sentencia SL 4609 del 6 de octubre de 2021, se expuso por parte de nuestro máximo órgano jurisdiccional del cierre de la justicia ordinaria, lo siguiente:

“...En relación con la excepción de prescripción aducida por Colpensiones si bien los artículos 488 del CST y 151 CPTSS son los que regulan dicho fenómeno extintivo, por virtud del cual

opera el termino trienal, contabilizado desde la exigibilidad de la obligación, no obstante, dado que en este tipo de procesos las pretensiones de la demanda tienen carácter declarativo, es decir, están referidas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estadio jurídico, acaecido con anterioridad a que se trabé la litis, la sala considera que la acción de ineficacia del traslado entre los regímenes pensionales es imprescriptible, tal como se ha sostenido, entre muchas otras, en las sentencias CSJ SL1688-2019; CSJ SL 12715-2014; CSJ SL 28479,4 de jun. 2028, CSJ SL 39347 y CSJ SL 8397, 5 Jul. 1996...”.

De lo anterior se concluye, entonces, que no ha operado plazo extintivo alguno frente a la acción que dio origen al proceso, y tampoco prospera la excepción de prescripción de la acción de nulidad del acto jurídico propuesta por las demandadas, se reitera, por encontrarse en estudio el tema bajo los presupuestos de la ineficacia.

A CONTINUACIÓN, SE EXAMINA LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN POR VEJEZ RECLAMADA EN LA DEMANDA

La prueba documental que obra en el expediente digital da cuenta:

1. Que la señora Luz Marina Montoya Hincapié nació el 23 de abril de 1955.
2. Que la citada demandante solicitó el 18 de mayo de 2010 ante el ISS hoy Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y la entidad por medio de la Resolución GNR 263035 de 18 de octubre de 2013, se la negó aduciendo que solo acredita 744 semanas de cotización.
3. Que el señor Rafael Ignacio García bajo la razón social Confecciones RAYRO y Confecciones RONICAR, en escrito de fecha 8 de marzo de 2015, certifica que la señora Luz Marina Montoya Hincapié se desempeñó en el cargo de operaria durante el periodo comprendido del 1° de junio de 1995 al 1° de enero de 1998 y del 13 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2007.

4. Que la señora Flor Gertrudis Gómez bajo la razón Flor Gertrudis Gómez, en escrito de fecha 1° de abril de 2015, certifica que la señora Luz Marina Montoya Hincapié se desempeñó en el cargo de operaria durante el periodo comprendido del 1° de enero de 1998 al 30 de septiembre de 1999.
5. Que la señora Luz Marina Montoya Hincapié se afilió al ISS hoy Colpensiones el 30 de marzo de 1982 y efectuó aportes de manera interrumpida desde tal fecha hasta el 1° de julio de 2015, para un total de 431 semanas.
6. Que el 31 de mayo de 1995, la mencionada se trasladó a Colfondos, con aportes desde junio a noviembre de 1995, equivalentes a 25 semanas.
7. Que Colfondos pagó en favor de Colpensiones el 12 de junio de 1997 la suma de \$93.337 y el 17 de febrero del 2000 la suma de \$18.814 por concepto de aportes sufragados a la AFP.
8. Que posteriormente se vinculó a Colmena, hoy Protección el 15 de agosto de 1996 y efectuó aportes en dicha AFP hasta el 31 de agosto de 1998, equivalentes 49 semanas.
9. Que Protección pagó a órdenes de Colpensiones en su orden: el 21 de diciembre de 1998 la suma de \$244.793, 5 de noviembre de 2002 la suma de 243.359 y el 10 de mayo de 2005 la suma de \$128.810 por concepto de aportes sufragados al fondo privado.
10. Que dentro del proceso ordinario laboral bajo radicado 05001 31 05 022 2016 00173 00 instaurado por la señora Luz Marina Montoya Hincapié en contra de Colpensiones, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín mediante sentencia de 2 de junio de 2016, condenó a Colpensiones a pagar a la demandante lo siguiente: la pensión de vejez al amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 23 de abril de 2010, sobre catorce mesadas pensionales y en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente; la suma de \$50.047.541 por retroactivo pensional causado hasta el 31 de mayo de 2016; intereses

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional reconocido desde el 19 de septiembre de 2010 y costas del proceso.

11. Que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia de la magistrada Luz Amparo Gómez Aristizábal en providencia del 24 de agosto de 2017, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

Se advierte que en dicho proceso la accionante demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 24 de abril del 2010, aplicando el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los intereses de mora y costas procesales.

Adicionalmente, el Superior concluyó que la señora Luz Marina Montoya Hincapié, perdió el beneficio del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues si bien al 1º de abril de 1994 tenía cumplidos más de 35 años de edad, no acreditaba 15 años de cotizaciones o su equivalente en tiempos de servicios para conservar dicho beneficio, en virtud del traslado que efectuó al RAIS, pese a su retorno al RPMPD, y que en la demanda no fue planteado el tema de la ineficacia, nulidad o inexistencia de la afiliación al RAIS, por lo que no podría la judicatura abordarlo de oficio.

12. Que el 13 de marzo de 2018, la actora reclamó ante Colpensiones la ineficacia o en subsidio la nulidad de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección, y como consecuencia, se disponga el restablecimiento de su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones sin solución de continuidad, y en consecuencia el pago de la pensión de vejez al amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, intereses moratorios y/o indexación.

DEL DERECHO PENSIONAL

El documento de identidad que obra en el expediente digital, da fe que la señora Luz Marina Montoya Hincapié nació el 23 de abril de 1955 y tenía 38 años de edad el 1° de abril de 1994 cuando entró en vigencia en el sector privado el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, o sea, que es beneficiaria, en principio, del régimen de transición previsto en el artículo 36 de esta normatividad, que conservó la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas de cotización y el monto de la pensión por vejez establecidos en el régimen anterior, a favor de tres categorías de trabajadores: los hombres con cuarenta o más años de edad, las mujeres con treinta y cinco o más años de edad, y unos y otras que independientemente de su edad tuviesen quince o más años de servicios cotizados.

El régimen anterior al cual se hallaba afiliada la accionante, era el contenido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del decreto 758 de la misma anualidad, que para acceder a la pensión por vejez exigía sesenta o más años de edad a los hombres o cincuenta y cinco o más años de edad a las mujeres, esta última a la cual accedió la accionante el 27 de marzo de 2014, y un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Adicionalmente, ha de considerarse que el Parágrafo Transitorio 4° del Acto Legislativo 001 de 2005 expedido el 25 de julio del mismo año, instituyó el 31 de julio de 2010 como límite para la vigencia del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo desarrollan, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen tuviesen cotizadas, al menos, 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del acto legislativo, a los cuales se les mantuvo tal régimen hasta el 2014.

La historia laboral que milita en el expediente da cuenta que la demandante cotizó hasta el 3 de julio de 2008 y durante toda su vida laboral un total de 848 semanas, de las cuales 505 semanas corresponden a los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, corridos entre el 23 de abril de 1990 y la misma fecha de 2010, razón por la cual consolidó su derecho a la pensión por vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990.

En la contabilización de estas semanas la Sala tuvo en cuenta 12.85 semanas de los ciclos octubre, noviembre y diciembre de 1996, que tienen la observación “Pago recibido del Régimen de Ahorro Individual por traslado”, que están registrados en la historia laboral pero no fueron incluidos en la suma de las semanas, pese a que obligaba hacerlo.

DE LA MESADA 14

El inciso 8° y el Parágrafo Transitorio 6° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 prescriben que las personas cuyo derecho a la pensión se consolide a partir de la vigencia de dicho acto, no pueden recibir más de trece mesadas pensionales, excepto aquellas que perciban una pensión igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la prestación se causa antes del 31 de julio de 2011, como lo es del caso del actor.

El Acto Legislativo aludido se expidió el 25 de julio de 2005. La señora Luz Marina Montoya Hincapié arribó a los 55 años de edad el 23 de abril de 2010, fecha para la cual conforme su historia laboral acumulaba 505 semanas en los últimos veinte años anteriores a tal fecha, superando las exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez, por ende, tiene derecho al pago de catorce mesadas como lo dispone la referida normatividad.

En consecuencia, se confirmará en este aspecto la providencia.

DE LA PRESCRIPCIÓN DE MESADAS

En lo que respecta a la prescripción, conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se hace exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

El artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el mismo texto alusivo a la interrupción de la prescripción.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esta Sala de Decisión comparte, el análisis consonante de los preceptos lleva a concluir que únicamente es posible interrumpir la prescripción una vez (Sentencia de 21 de febrero de 2012, Radicado 41.908 y SL 374 de 12 febrero de 2020, Radicado 67.868).

El *a quo* indicó que se encuentran afectadas por dicho fenómeno las mesadas pensionales causadas entre el 23 de abril de 2010 y el 22 de junio de 2015, en la medida que la presentación de la demanda efectuada el 22 de junio de 2018 interrumpió la prescripción, y que aunque la pensión de vejez se reclamó el 18 de mayo de 2010, estando interrumpida hasta el 18 de octubre de 2013, cuando Colpensiones por medio de la Resolución GNR 263035 resolvió la prestación desfavorablemente, a partir de tal momento transcurrieron más de tres años hasta 2018, sin que tenga mayor relevancia la reclamación administrativa realizada el 13 de marzo de 2018 con la cual se solicitó la ineficacia de traslado y la pensión de vejez.

La prueba documental como se refirió, da cuenta:

1. Que el 13 de marzo de 2018, la actora reclamó ante Colpensiones la ineficacia o en subsidio la nulidad de su afiliación al Régimen de Ahorro

Individual con Solidaridad administrado por Protección, y como consecuencia, se disponga el restablecimiento de su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones sin solución de continuidad, y en consecuencia el pago de la pensión de vejez al amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, intereses moratorios y/o indexación. Y

2. Que la demanda que dio inicio a este proceso se presentó el 22 de junio de 2018.

Por ende, y contrario a lo resuelto por el funcionario de primera instancia, el fenómeno prescriptivo se interrumpió con la reclamación administrativa efectuada el 13 de marzo de 2018, habiendo lugar a declarar prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 13 de marzo de 2015. Siendo, así, se modificará en este aspecto la decisión.

DEL RETROACTIVO PENSIONAL

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida se le aplican las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en dicha Ley.

Los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, contentivo del Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, prevén que la pensión por vejez se reconoce a solicitud de parte interesada una vez colmados los requisitos mínimos para acceder a la prestación, pero se requiere la desafiliación del régimen para poder disfrutar de la misma.

Sobre el tema se ha pronunciado en diversas oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y ha explicado que la causación y el disfrute de la pensión por vejez son dos figuras jurídicas distintas porque tienen identidad y efectos propios, pues la primera se da desde el momento mismo en

que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de semanas cotizadas, y la segunda, o sea, el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, están supeditados a la desafiliación del régimen. También ha dicho la citada Corporación Judicial que, de manera excepcional, cuando en un proceso no exista la prueba de la desafiliación al sistema, ésta puede inferirse de hechos tales como la terminación del vínculo laboral del afiliado, la falta de pago de cotizaciones, el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas, y la solicitud de la prestación, que no dejen duda de la intención del afiliado de cesar su vinculación al sistema en procura de la obtención del derecho pensional (Sentencias de 1° de febrero de 2011, Radicado 38.776; SL 15091 de 2015; SL 5603 de 2016 y SL 5564 de 4 de diciembre de 2019, Radicado 72.652).

Como se indicó anteriormente, la señora Luz Marina Montoya Hincapié nació el 23 de abril de 1955, cumplió 55 años de edad en la misma fecha de 2010, y efectuó cotizaciones al sistema general de pensiones, hasta el 3 de julio de 2008, por tanto, conforme a la normatividad y la jurisprudencia anotadas, se tiene como fecha de desafiliación del sistema pensional el 3 de julio de 2008, y como fecha de disfrute de la prestación, el 13 de marzo de 2015.

Se precisa que la accionante efectuó aportes en los ciclos junio y julio de 2015, por veinte días y un día, respectivamente, que se consideran aislados, en la medida que se sufragaron con un IBC equivalente al SMLMV.

Las mesadas pensionales causadas entre el 13 de marzo de 2015 y el 30 de noviembre de 2022, calculadas con el salario mínimo legal mensual vigente e incluyendo las mesadas adicionales de junio y de diciembre de cada año, totalizan Ochenta y Seis Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos (\$86.994.666), de acuerdo a la liquidación, lo cual coincide con el valor deducido por el *A quo*, razón por la cual se modificará en dicho aspecto la decisión, como se observa a continuación:

AÑO	MESADA	NUMERO MESES	TOTAL
2015	\$644.350	11 y 18 días	\$ 7.474.640
2016	\$689.455	14	\$ 9.652.370
2017	\$737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2021	\$ 1.000.000	12	\$ 12.000.000

TOTAL	\$86.994.666
-------	--------------

A partir del 1° de diciembre de 2022 Colpensiones reconocerá y pagará a la accionante una mesada pensional por valor de Un Millón de Pesos (\$1.000.000), sin perjuicio de los aumentos legales futuros y del pago de las mesadas adicionales de junio y de diciembre correspondientes.

DE LOS APORTES EN SALUD

Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, la cotización para salud establecida en el Sistema General de Salud para los pensionados, está en su totalidad a cargo de éstos.

Acorde al criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que esta Sala de Decisión comparte, el descuento por salud constituye una condición esencial y necesaria al reconocimiento de la pensión, que opera por virtud de la Ley y se encuentra estrechamente relacionada con los principios que irradian el Sistema General de Seguridad Social, motivo por el cual el Juez al otorgar el derecho está facultado para autorizarla, porque el pagador de la entidad administradora es el llamado a hacerla efectiva y trasladarla a la EPS correspondiente. (Sentencias de 21 de junio de 2011, Radicado 48.003; 14 de febrero de 2012, Radicado 47.378; 6 de marzo de 2012, Radicado 47.528 y SL 1478 de 9 de mayo de 2018, Radicado 63.512)

A juicio de la Corporación mencionada, de no efectuarse tales descuentos, se desconocerían los principios orientadores de la prestación del servicio público

esencial de seguridad social consagrados en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, en especial, los de universalidad y solidaridad, y los rectores del servicio público de la seguridad social en salud de que trata específicamente el Decreto 1920 de 1994. Adicionalmente, tal omisión podría comprometer los derechos de acceso a los servicios de alto costo que requieren un mínimo de semanas cotizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, se autorizará a Colpensiones para descontar del retroactivo pensional reconocido a la actora, las sumas que por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud esté en la obligación de trasladar a la EPS a la cual se encuentre afiliada la pensionada.

Por lo que se adicionará en este punto la sentencia.

DE LOS INTERESES MORATORIOS

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prescribe que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata la normatividad mencionada, la entidad administradora correspondiente debe reconocer y pagar al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a recibir el pago de las mesadas pensionales emerge del cumplimiento de los requisitos que la Ley exige para poder acceder a la pensión reclamada.

Sin embargo, en sentencias de 29 de mayo de 2003, Radicado 18.789; 13 de junio de 2012, Radicado 42.783; y 6 de noviembre de 2013, Radicado 43.602, la Corporación referida precisó que no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios en aquellos eventos en que la decisión de las administradoras de pensiones públicas o privadas de negar una prestación encuentren plena justificación, bien porque tengan un respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la Ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los Jueces en la función que les

es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a tales administradoras no les compete y les es imposible predecir. Lo anterior, teniendo en cuenta que en muchos casos la interpretación de la norma a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social no coincide con el texto literal del precepto que las administradoras deben aplicar al momento de definir la procedencia de la prestación reclamada.

En este caso y contrario a lo expuesto por el apoderado del actor en el recurso de apelación, no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios, porque la pensión de vejez se concedió en esta instancia en virtud de la declaratoria de ineficacia de afiliación del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado Colpensiones, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección y por Colfondos y con fundamento en el criterio jurisprudencial esbozado.

DE LA INDEXACIÓN

La indexación del retroactivo pensional resulta viable, porque es el mecanismo objetivo de corrección monetaria que se aplica cuando las entidades administradoras que integran el sistema de seguridad social pagan tardíamente las obligaciones a su cargo, y la ley no prevé otra forma de solucionar su detrimento económico.

Por lo tanto, se confirmará en este punto lo resuelto.

En consideración a que la indexación se concede en favor de la accionante, se precisa que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a tal actualización, por tanto, dichos valores no serán objeto de aplicación de la misma, pues no puede la actora beneficiarse de una actualización con base en una suma dineraria que corresponde al subsistema de salud.

DE LAS COSTAS

En virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, se absolverá a tal entidad de las costas procesales de la primera instancia, en razón a que la conducta de la precitada administradora de pensiones no dio lugar a la ineficacia que se declara, a más que su presencia en el juicio se da por la necesidad que en el evento de proferirse sentencia que acoja las pretensiones de la demanda, reciba los dineros objeto de restitución a que haya lugar, valide las cotizaciones de la accionante, la tenga como su afiliada y reconozca y pague la pensión de vejez.

En consecuencia, las costas en la primera instancia corren en favor de la señora Luz Marina Montoya Hincapié y a cargo de Protección y de Colfondos.

Ante la desventura del recurso de apelación las costas en esta instancia corren en favor de la demandante y a cargo de Colpensiones.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.000.000, para esta instancia.

Sin costas a cargo de la parte actora, debido a la prosperidad parcial del recurso de alzada.

Así las cosas, se confirmará, modificará, adicionará y revocará la providencia que se revisa en apelación y consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Modificar la fecha de causación y el monto del retroactivo pensional, así:

Se condena a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Luz Marina Montoya Hincapié:

- La suma de Ochenta y Seis Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos (\$86.994.666), por concepto de retroactivo pensional causado entre el 13 de marzo de 2015 y el 30 de noviembre de 2022.
- La suma de Un Millón de Pesos (\$1.000.000), por mesada pensional a partir del 1º de diciembre de 2022, sin perjuicio de los aumentos legales futuros y del pago de las mesadas de junio y de diciembre adicionales correspondientes.

SEGUNDO: Se Autoriza a Colpensiones para descontar del retroactivo pensional reconocido en este juicio a la actora, las sumas que por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud esté en la obligación de trasladar a la EPS a la cual se encuentre afiliada la pensionada, con la aclaración que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a la indexación.

TERCERO: Se declara probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas antes del 13 de marzo de 2015.

CUARTO: Se revoca la condena en costas a cargo de Colpensiones, impuesta en la primera instancia.

QUINTO: Ante la desventura del recurso de apelación las costas en esta instancia corren en favor de la demandante y a cargo de Colpensiones.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.000.000, para esta instancia.

SEXTO: Confirmar en lo demás la decisión que se revisa en apelación y consulta.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 8e06360872d6ddd240fd6fc382bfa12da544d1bf8100bee4bcf718d144eb435d

Documento generado en 15/12/2022 01:22:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>